

Semana.com

Disputar la verdad



Opinion On Line Lo destacable a los tres años de aplicación de la Ley de Justicia y Paz no son las confesiones; sino, justamente, el efecto colateral que han producido esas verdades a medias y amañadas. Se ha abierto un espacio de contienda política que podría conducir a un próspero debate sobre la atrocidad y las claves para lograr su superación.

Michael Reed Hurtado*

Los procesos de verdad y justicia, que persiguen la rendición de cuentas y establecimiento de responsabilidades frente a atrocidades perpetradas en el pasado, se suelen desenvolver inmersos en lógicas de redención y armonía. Desafortunadamente, no hay nada más lejos de la realidad. Los procesos de reconocimiento de lo acontecido no son pacíficos; por el contrario, son procesos típicos de disputa política.

Nadie puede prometer un camino pacífico hacia la verdad y el reconocimiento de las atrocidades perpetradas. La experiencia en todo el mundo ratifica que la búsqueda de la verdad y la justicia es un camino contencioso que puede o no terminar en una transformación hacia la coexistencia de grupos en disputa y la consolidación de formas inclusivas de gobierno. Hasta los casos más mentados como ilustrativos de reconciliación y armonía – el de Sudáfrica, por ejemplo – son hoy prueba de procesos abiertos de contienda (a veces, intensa).

El consenso y la armonía, sencillamente, no son productos viables en un proceso de búsqueda de la verdad que pretende encarar las atrocidades del pasado: algunos perpetradores están expuestos; buena parte de las élites políticas y militares está interesada en esconder el pasado; las víctimas quieren a toda costa saber lo que les pasó, por qué les pasó y cómo les pudo haber pasado sin que nada pasara; y la gran mayoría del público se pregunta por qué pasan tanto tiempo hablando de lo mismo.

Este es el escenario de disputa: unos quieren saber lo que pasó y a otros (por lo general, la mayoría) no les interesa que se sepa o, simplemente, no les importa.

Dejado a la inercia, este proceso conduce a la negación, a no confrontar el incómodo pasado, o a versiones parciales de “hombres malos y desviados” que, en momentos de locura, se lanzaron inexplicablemente contra sus prójimos. La narración de esta última alternativa es espantosa, pero no clarifica por qué pasaron las cosas que pasaron y, peor aún, no ofrece pistas para evitar que sigan pasando.

En momentos en los cuales se des-cubren o se “confiesan” algunas atrocidades, se abre literalmente un combate social por la verdad. La contienda es la médula de estos procesos. Dependiendo de cómo se comporten los distintos poderes (nacionales y locales) involucrados en la disputa, el resultado puede ser más o menos conducente al reconocimiento de las atrocidades y de las víctimas.

En un reciente estudio sobre los efectos de las confesiones de los perpetradores en los procesos de reconocimiento de las atrocidades perpetradas en distintos contextos nacionales, Leigh A. Payne enfatiza este punto: “Esas confesiones, no obstante, no revelan verdades sobre el pasado. Son meros relatos, explicaciones y justificaciones de comportamientos desviados, o versiones personales sobre el pasado. Como tal, desestabilizan o impulsan a auditorios de víctimas, sobrevivientes y activistas de derechos humanos a afirmar las suyas, usualmente cuestionando interpretaciones del pasado. Mientras que víctimas y sobrevivientes exigen el establecimiento de responsabilidades, los favorecedores del régimen autoritario defienden el pasado, negando o silenciando retratos perjudiciales del mismo. El conflicto surge en relación con las confesiones en la medida en que los actores sociales disputan las interpretaciones de qué fue lo que pasó y compiten por el poder de cuál interpretaciones definirá la agenda política, los términos del debate público y el resultado del debate”. (Payne)

Una de las derivaciones más interesantes – y quizás menos esperada por los perpetradores y algunas élites políticas y militares en Colombia – de la aplicación de la ley de justicia y paz es que se ha profundizado la contienda alrededor de la verdad sobre el paramilitarismo y las atrocidades perpetradas bajo ese manto.

Como es sabido, en una decisión particular, el legislador colombiano confió a las formas de la justicia penal y a la confesión inducida por el favorecimiento punitivo el “averiguamiento” de la verdad sobre las atrocidades perpetradas por los grupos paramilitares. Este modelo plantea que, en un acto parecido a la contrición, el paramilitar arrepentido cuenta lo que hizo y todo lo que sabe (la verdad y nada más que la verdad, reza el refrán), guiado y observado por expertos en el arte de establecer verdades procesales (fiscales, procuradores, jueces, y otros abogados e investigadores). El rito se desenvuelve frente a un reducido grupo de víctimas y sus representantes que deben observar mudos y pasivos, por lo general. Según el modelo, las formas del derecho controlan la diligencia y aseguran el descubrimiento de la verdad.

Sin embargo, en la práctica, el proceso de des-cubrimiento de verdades mediante confesiones inducidas ha sido problemático. Las versiones de los paramilitares en el procedimiento penal especial de la ley 975 de julio de 2005 (ley de justicia y paz) son eso: versiones (además, libres). Son su recuento, su percepción y su manera de vivir con el pasado. Una visión opuesta a la de las víctimas y una visión, por más, incompleta.

Recordemos, además, que “la verdad, desde la perspectiva de aquellos más afectados por la violencia colectiva, reside, más que en los hechos mismos, en su interpretación moral, y la manera como son interpretados los hechos es comúnmente manipulada y distorsionada por aquellas personas que iniciaron la violencia”. (Stover y Weinstein)

Lo destacable a los tres años de aplicación de la Ley de Justicia y Paz no son las confesiones; sino, justamente, el efecto colateral que han producido esas verdades a medias y amañadas. Se ha abierto un importante espacio de contienda política que podría conducir a un próspero debate sobre la atrocidad y las claves para lograr su superación.

Tres años cumplidos desde la expedición de la ley 975, es poco lo que hay en cuanto a verdad procesalmente producida y la validez de lo poco que hay tambalea por múltiples razones que no viene al caso resaltar en este momento. Los colombianos no experimentan los efectos prometidos de las verdades sanadoras y redentoras de los paramilitares, pero tampoco están sumidos en el laberinto de las versiones oficiales del pasado.

¡Ni las verdades confesadas ni la verdad procesalmente determinada pondrán fin a la contienda! Las confesiones de los paramilitares seguirán; esa es la dinámica legal (o al menos debe serlo). Y como ha acontecido en otras sociedades – por ejemplo, en Ruanda o en la ex Yugoslavia – las decisiones judiciales (cuando lleguen y si llegan) serán insuficientes para paliar las injusticias y responder a las demandas sociales de las víctimas. (Stover y Weinstein)

A tres años de vigencia de la Ley de Justicia y Paz es necesario pensar en propiciar nuevos mecanismos para lograr que los reclamos y las demandas de las víctimas encuentren otros espacios en los cuales puedan ser debatidos constructivamente, sin ignorar su naturaleza contenciosa.

El país está sumido en una contienda que tiene el potencial de generar importantes acciones innovadoras, la constitución de actores sociales e, idealmente, la construcción de una identidad social basada en el reconocimiento. (McAdam, Tarrow y Tilly)

El espacio para la disputa política, sin embargo, necesita cultivarse bajo reglas de respeto y garantías básicas de seguridad y libertad de expresión para aquellos que reclaman: verdad, justicia y reparación. Quienes tienen mayor capacidad de dirigir el debate – de incluir y excluir voces, y de poner y hundir temas – tienen la responsabilidad de garantizar que las voces de los oprimidos y victimizados puedan ser escuchadas y ser tenidas en cuenta en los procesos de toma de decisión tendientes a la construcción de la verdad.

¡Es hora de oír otras verdades!

Referencias:

- McAdam, Tarrow y Tilly, Dynamics of Contention, 2001.
- Payne, Unsettling Accounts, Neither Truth Nor Reconciliation in Confessions of State Violence, 2008.
- Stover y Weinstein, My Neighbor, My Enemy: justice and Community in the Aftermath of Mass Atrocity, 2004.

** Michael Reed es director adjunto y coordinador del área de justicia del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ por sus siglas en inglés), una organización internacional dedicada a la investigación y seguimiento de procesos de justicia transicional en el mundo que surgen de procesos de reconciliación después de conflictos internos.*

Semana.com ©2008.
Todos los derechos reservados.